



Serie de consultas de
la red de gobiernos
locales y regionales



LRG
NEXT
2021

EL FUTURO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALES

Síntesis N° 3

**FINANCIACIÓN
PÚBLICA de los
Servicios Públicos
Locales de CALIDAD**



LRG NEXT2021

Síntesis N° 3

FINANCIACIÓN PÚBLICA de los Servicios Públicos Locales de CALIDAD

Contenido

1.	Antecedentes	2
2.	La financiación de los servicios públicos locales y la crisis de Covid19	3
3.	Repercusión de la dotación de personal del servicio GLR y de la acción sindical	4
4.	Transferencias y subvenciones intergubernamentales	5
5.	Recolocación/descentralización y mandatos no financiados	5
6.	Sistemas fiscales subnacionales	6
7.	Remunicipalización/internalización	7
8.	Subvenciones cruzadas	7
9.	Consortios intermunicipales y asociaciones público-públicas	7
10.	Justicia fiscal y comercial para la administración local	8
11.	El potencial de los bancos públicos de desarrollo	10
12.	Estrategia de contratación pública local	11
13.	Fondo público de pensiones	12
14.	Conclusiones	13

Este documento ha sido elaborado por Daria Cibrario (ISP) con la colaboración de Robert Ramsay (CUPE) y Daniel Oberko (ISP).

Foto de tapa : © SCFP, Canadá

© Internacional de Servicios Públicos, Septiembre de 2021



1. ANTECEDENTES

Los gobiernos locales y regionales (GLR) se les pide cada vez más que hagan más con menos. En primera línea de la prestación de servicios públicos y la respuesta a las emergencias, las autoridades locales y sus trabajadores son esenciales para la aplicación de las políticas públicas nacionales y locales. Las ciudades y territorios tienen que prestar una amplia gama de servicios públicos locales: transporte, agua, alcantarillado, recogida y eliminación de basuras, policía, protección contra incendios, parques, educación, cultura y ocio, vivienda asequible y asistencia social. Los GLR se encargan, en última instancia, de la aplicación sobre el terreno de los marcos políticos mundiales (“localización”), como los [Objetivos de Desarrollo Sostenible \(ODS\)](#)¹ (en inglés); el [Acuerdo de París sobre el Cambio Climático](#); la [Nueva Agenda Urbana](#) (NAU); el [Protocolo de Sendai sobre la Preparación para los Desastres](#), y el [Programa de Trabajo Decente](#).

La obtención de recursos adecuados para financiar estos servicios municipales es la clave para garantizar el dinamismo económico y la inclusión social.² Los GLR y sus trabajadores también desempeñan un

papel fundamental en todas las cuestiones relacionadas con la inclusión social y la creación de empleo decente, y son actores cruciales para facilitar la inclusión de lxs trabajadores de la economía informal en la economía formal.³ La suficiencia financiera, la seguridad, la distribución, así como una formación de personal adecuada, y condiciones decentes para lxs trabajadores de los GLR van de la mano de la equidad, la calidad y el acceso a los servicios públicos para todxs. Sin embargo, cuando se trata de acceder a los recursos para hacerlo, la descentralización con mandatos no financiados, las restricciones presupuestarias y fiscales, los recortes de austeridad, la evasión de impuestos, las condicionalidades de los préstamos internacionales, los acuerdos comerciales y fiscales internacionales, la reducción de las transferencias intergubernamentales, etc., quitan cada vez más a los GLR los recursos que necesitan para financiar adecuadamente, dotar de personal y prestar servicios públicos locales de calidad (SPC) a sus comunidades.

La mayoría de los países pobres sufren un grave déficit de infraestructuras y servicios. Mientras que en algunas



ciudades y territorios aún no se han desarrollado las infraestructuras de servicios públicos que necesitan, en otras, antes bien desarrolladas, se asiste a la decadencia o desaparición de sus SP locales, que antes funcionaban bien. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, los gobiernos se han visto obligados a recortar el gasto público y a privatizar las funciones estatales como condición para recibir el alivio de la deuda y la ayuda al desarrollo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las iniciativas de financiación privada se han convertido en un elemento habitual, aunque han fracasado en gran medida a la hora de reducir la pobreza, y las Asociaciones Público-Privadas (APP) siguen siendo “promovidas como una solución al déficit de financiación necesario para alcanzar los ODS”, aunque hay pruebas de que imponen una carga más pesada a lxs ciudadanxs que a los socios del sector privado, infligen altos costes al erario público, tienen impactos negativos en las personas pobres, así como en el entorno natural, y carecen de transparencia.⁴ El Covid19 ha agudizado la crisis de financiación de los GLR y ha hecho visible su coste humano para todxs.

¿Cómo cuadrar el círculo? ¿Cómo pueden los GLR y sus trabajadores prestar los tan necesarios servicios públicos locales de calidad con estas limitaciones de financiación? Gran parte del debate que condujo a la Nueva Agenda Urbana (NUA) de Hábitat III de 2016 -la conferencia de referencia de la ONU para las políticas

urbanas que se celebra cada 20 años- se concentró en torno a la competencia fiscal intermunicipal, las asociaciones público-privadas, la evaluación comparativa de las ciudades para la calificación crediticia de los fondos privados en el mercado de valores, las tasas de lxs usuarixs, los bonos municipales y la financiación combinada.⁵ Los servicios públicos pueden ser un mercado lucrativo para los proveedores privados, que están dispuestos a subir las tarifas y reducir la calidad del servicio para obtener beneficios. Como el acceso al agua, la sanidad, la energía o el transporte son una necesidad vital, su exigencia es inflexible: cualquiera estaría dispuesto a pagar todo lo que posee o a endeudarse para salvar su vida.⁶

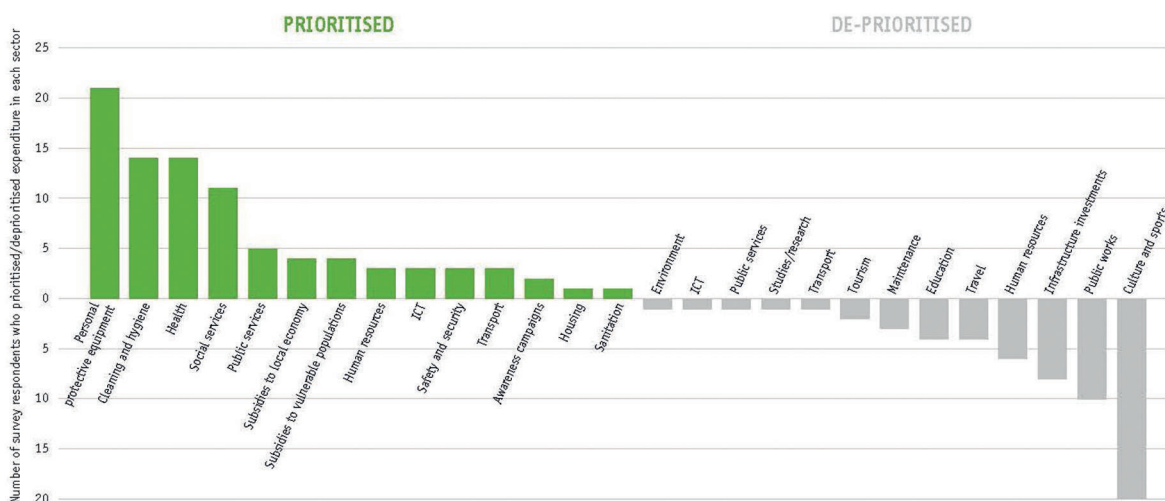
La ISP no cree que los servicios financiados con fondos privados sean una solución viable que funcione para las personas, ni que sean socialmente justos y ambientalmente sostenibles. La ISP ha defendido sistemáticamente la justicia fiscal para los gobiernos locales y las comunidades, así como sistemas fiscales municipales progresivos. La confluencia de múltiples crisis - pandémica, climática, social, económica, de desplazamiento, etc. - que se avecina exige a lxs trabajadores y sindicatos de los GLR que revisen las opciones existentes y exploren las nuevas oportunidades disponibles para actuar colectivamente con el fin de reforzar la financiación pública para un acceso mejor y más equitativo a los SP locales de calidad para todxs.

2. LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES Y LA CRISIS DE COVID19

En 2021, se espera que los GLR de todo el mundo hayan perdido una media de entre el 15 y el 25% de sus ingresos. En África, sus pérdidas de ingresos podrían llegar al 60%. El avance de los gastos extraordinarios, unido a la disminución de los ingresos por la paralización de la economía, las pérdidas de empleo en la economía formal e informal, las quiebras de empresas y los traslados de los hogares a otras zonas, por necesidad o por elección, han supuesto una gran presión sobre muchas finanzas de GLR. Los GLR también han perdido ingresos por alquileres, tasas de servicios públicos e impuestos sobre bienes inmuebles. Los cierres de negocios han repercutido negativamente en los alquileres de espacios comerciales de propiedad pública y han frenado el crecimiento económico. Zonas excesivamente dependientes de actividades económicas específicas, como el turismo, los servicios y la hostelería se han visto especialmente

afectadas por la pérdida de consumo local, las tasas de aparcamiento, el IVA y el impuesto de residencia.

Los municipios con fondos reducidos, reservas inadecuadas y normas presupuestarias estrictas, cuya flexibilidad en materia de déficit y poderes de endeudamiento son limitados, se han visto especialmente perjudicados. Han tenido que volver a priorizar los gastos en función de los recursos disponibles y han tenido que recortar en proyectos, servicios y personal. Según una encuesta realizada en una muestra de 33 ciudades y regiones de 22 países de todos los continentes, los GLR reasignaron principalmente la financiación a equipos de protección personal para el personal de primera línea, medidas de limpieza e higiene pública, así como servicios de salud y sociales; mientras que restaron prioridad a la cultura y el deporte, las obras públicas, las inversiones en infraestructuras y los recursos humanos (figura siguiente).⁷



Fuente: CGLU-Metropolis-LSE Cities 2021



Aunque la mayoría de los gobiernos centrales han proporcionado transferencias intergubernamentales y subvenciones de emergencia hasta cierto punto, si no se aborda a medio y largo plazo, esta crisis de ingresos de los GLR puede socavar los objetivos de desarrollo urbano, poner en peligro la inversión en infraestructuras sociales y físicas vitales, y provocar recortes en los servicios públicos locales y pérdidas de empleo en el momento en que más se necesitan, exacerbando las desigualdades sociales y territoriales y comprometiendo la recuperación.

Los GLR van a desempeñar un papel fundamental en la recuperación y la reconstrucción. Casi todos los países han adoptado paquetes de recuperación cuya magnitud supera a los adoptados tras la crisis financiera de 2008. Muchos han planificado una inversión pública históricamente elevada en los SP locales y en las infraestructuras físicas, como la sanidad, el cuidado, el agua y el saneamiento, la gestión de residuos, la vivienda y el transporte públicos, las carreteras, los puentes, los ferrocarriles y la energía limpia, entre otros, que

son fundamentales para una buena recuperación.⁸ Reconociendo la magnitud del desafío y el papel estratégico que los GLR están llamados a desempeñar, en su [Declaración Conjunta en el contexto de la pandemia de Covid-19](#), (en inglés) la ISP y CGLU hacen un llamamiento a los gobiernos nacionales y a las instituciones financieras multilaterales e internacionales/regionales para que:

- Proporcionen los recursos adecuados a los GLR para mitigar las consecuencias de la crisis y apoyar la recuperación de la pandemia. Invertir de forma prioritaria en unos SP de calidad y de acceso universal cada vez más fuertes para garantizar una rápida recuperación y evitar una catástrofe social y medioambiental posterior al Covid-19.
- Establecer los marcos legislativos y políticos para dotar a los GLR de sostenibilidad financiera a largo plazo -incluso mediante sistemas fiscales municipales más fuertes y el acceso a una financiación adecuada- y la accesibilidad y asequibilidad de los servicios esenciales para todos, con el fin de vencer al Covid-19 y afrontar eficazmente futuras crisis.⁹

3. REPERCUSIÓN DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO GLR Y DE LA ACCIÓN SINDICAL

Las afiliadas de la ISP están actuando para contrarrestar la crisis de financiación de los servicios públicos locales. En Canadá, el sector municipal lleva años enfrentándose a una crisis de ingresos. En 2020 los municipios canadienses se enfrentaron a un déficit presupuestario colectivo de aproximadamente 12.000 millones de dólares canadienses, lo que representa una pérdida del 9,7% al 12,1% con respecto al año anterior. Este margen es muy estrecho para los municipios de Canadá, donde los GLR sólo pueden recaudar fondos a través del impuesto sobre la propiedad y reciben una parte muy limitada de los impuestos federales del gobierno federal para financiar los SP y las infraestructuras. Por ello, el impacto de la crisis de ingresos del Covid19 en el servicio de los GLR canadienses ha sido muy duro: las tasas de despido en las bibliotecas públicas municipales, por ejemplo, se han acercado al 90%. Las propuestas del Estado van encaminadas a los recortes de austeridad de hasta el 25% en los SP, incluso en la sanidad y la educación públicas. El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) está estableciendo alianzas para lanzar campañas de oposición a los recortes de austeridad como respuesta política y para crear una narrativa alternativa para este asunto. En Australia, para el Sindicato de Servicios Australianos (ASU) la sostenibilidad financiera de los SP locales es una prioridad absoluta. El sindicato está tratando de conseguir que un futuro gobierno laborista se comprometa a que el 1% de los ingresos fiscales federales se destinen directamente a los GLR para financiar los SP en las comunidades.¹⁰

Una encuesta realizada por la Liga Nacional de Ciudades (NLC) entre más de 1.100 municipios estadounidenses reveló que el 74% ya había empezado a hacer recortes presupuestarios.¹¹ Una de las consecuencias fue que, en octubre de 2020, los estados y las localidades estadounidenses habían suspendido o despedido a 1,2 millones de trabajadores y el 42% ya había congelado la contratación o tenía previsto hacerlo.¹² Por el contrario, ese mismo año 55 grandes empresas obtuvieron unos beneficios combinados de 40.500 millones de dólares y sus pagos de impuestos federales sobre la renta de 2020 fueron nulos.¹³ La Federación Estadounidense de Empleadxs Estatales, Municipales y de Condados (AFSCME) tiene una campaña en curso en la que moviliza a sus miembros para exigir al Gobierno de EE.UU. que “[financie las primeras líneas](#)” en apoyo de la “[Agenda para reconstruir mejor](#)” y el “[Plan de empleo estadounidense](#)” de la Administración Biden.¹⁴ En el Reino Unido, el sindicato de servicios públicos UNISON ha lanzado la campaña “[Salvemos nuestros servicios](#)” para alertar al público y sensibilizar a lxs parlamentarixs británicxs sobre las consecuencias que las carencias en los ayuntamientos están teniendo ya en las comunidades, provocando la reducción y desaparición de SP locales vitales. Con la ayuda¹⁵ de un [mapa interactivo que muestra los recortes](#), la campaña anima y facilita a la ciudadanía y usuarixs de los servicios a ponerse en contacto con sus diputadxs para exigirles que aprueben las transferencias de fondos adecuadas.¹⁶





4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES INTERGUBERNAMENTALES

Una de las principales fuentes de ingresos para la financiación de los servicios y la dotación de personal de los GLR procede de las transferencias y subvenciones intergubernamentales. A menudo, cuanto más centralizado esté el Estado, más dependerán los GLR de las transferencias de los gobiernos centrales, no sólo para sufragar los costes de los grandes proyectos de infraestructura, sino también para el funcionamiento diario de la

administración local y la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, incluso cuando éstas son sustanciales, dejan poca flexibilidad de asignación a los GLR: entre el 70 y el 80% de las transferencias del gobierno central son fondos no discrecionales destinados a prioridades de gasto específicas, normalmente dentro de un sector, lo que dificulta las respuestas de emergencia intersectoriales.¹⁷

5. TRANSFERENCIAS/DESCENTRALIZACIÓN Y MANDATOS NO FINANCIADOS

A lo largo de las últimas décadas, muchas competencias en materia de servicios públicos vitales han sido transferidas o descentralizadas a los gobiernos locales (por ejemplo, el agua, los residuos y el saneamiento, los bomberos, los servicios sociales, etc.) o (re)definidas como responsabilidades compartidas entre los gobiernos centrales y subnacionales (por ejemplo, la sanidad, los servicios sociales, la educación, la vivienda pública, etc.). Sin embargo, aunque existe un gran apoyo a la transferencia de competencias a las áreas locales y a la aplicación del principio de “subsidiariedad”¹⁸, acercando los servicios a la ciudadanía, los recursos y las competencias fiscales no siempre se han visto reflejados, ya sea por la falta general de financiación, la mala gobernanza o las luchas de poder entre los distintos niveles de gobierno. Como resultado, muchos GLR se encuentran con mandatos sin financiación, lo que se traduce en servicios públicos locales deficientes o inexistentes.

En algunos contextos, la descentralización se ha traducido en un desplazamiento de la responsabilidad y el poder de las autoridades públicas hacia empresas privadas de ámbito local, organizaciones benéficas, “voluntarixs” (mano de obra barata o no remunerada, abrumadoramente feminizada y racializada) y otras organizaciones no gubernamentales, reduciendo el Estado y la financiación gubernamental o retirándola por completo.¹⁹ Por último, aunque muchos Estados han recurrido a la filantropía como panacea, cuando se trata de la financiación de los servicios públicos, la caridad es una forma de facto de privatización de los servicios públicos y pone en peligro el carácter de derecho al acceso equitativo a los servicios públicos de calidad para todos financiados por los impuestos, haciéndolos condicionales, paternalistas y dependientes de la buena voluntad de instituciones y/o individuos ricos y poderosos.



© jcomp - www.freepik.com

6. SISTEMAS FISCALES SUBNACIONALES

Si bien la mayoría de los servicios públicos se prestan a nivel local, en el lugar de utilización, los GLR sólo representan el 24% del gasto público mundial.²⁰ En todo el mundo existe una gran variedad de sistemas de financiación de los SP locales. Los sistemas varían mucho debido a las diferentes estructuras de costes de los servicios, pero también reflejan la disponibilidad de recursos, los marcos institucionales y de gobernanza, así como las normas y expectativas sociales en torno a los servicios públicos. Por lo general, los ingresos propios de los GLR comprenden una combinación de ingresos locales, impuestos sobre la propiedad y/o el consumo (por ejemplo, la cuota del IVA, el impuesto sobre el turismo) y tasas de usarix (por ejemplo, aparcamiento, transporte, agua y alcantarillado, etc.). Una limitación clave para la financiación de los GLR es que no pueden recuperar los impuestos de las bases imponibles móviles (por ejemplo, los beneficios de las empresas multinacionales y las transacciones

financieras), sino sólo de las inmóviles, arraigadas en sus territorios.

Aunque existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de reforzar los sistemas fiscales de los GLR, a menudo existen restricciones que limitan sus poderes fiscales y reguladores y dificultan la posibilidad de colmar por sí solos el déficit de ingresos y gastos. Los pasos clave hacia formas progresivas de recaudación de recursos de los GLR incluyen la revalorización de la propiedad (valor del terreno acumulado); la formalización progresiva de la economía y el empleo; y el refuerzo en la dotación del personal y las competencias de las autoridades fiscales locales y nacionales. Los sistemas fiscales subnacionales también deben transformarse para que sean progresivos, de modo que incluso cuando existan sistemas de tarifas para lxs usarixs, aquellos que no puedan pagar puedan mantener el acceso a los servicios; y deben hacerse participativos y sensibles al género.



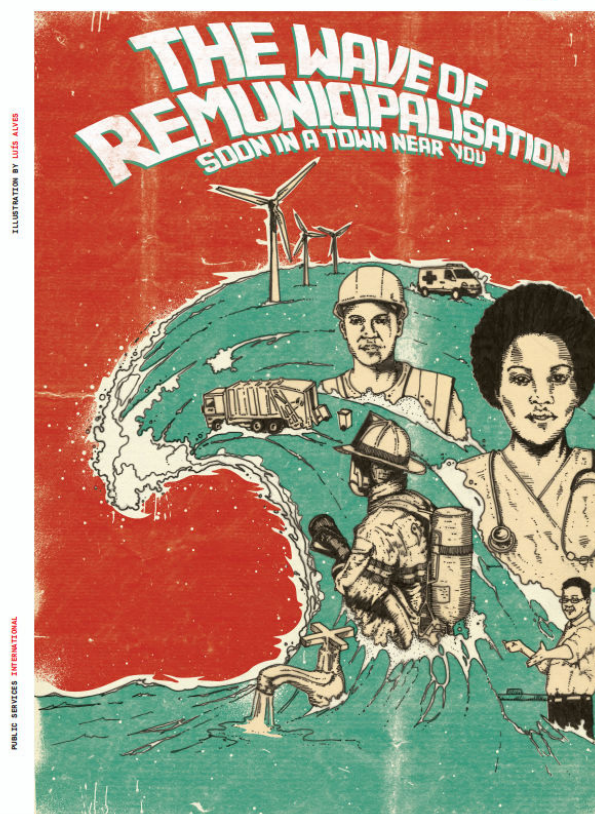
7. REMUNICIPALIZACIÓN/INTERNALIZACIÓN

23 June - World Public Service Day



Uno de los factores que a menudo se evoca para inclinar la balanza a favor de la remunicipalización / internalización de los servicios públicos locales es que puede suponer un ahorro considerable para los GLR.²¹ Cuando el servicio se gestiona públicamente, los ingresos excedentes pueden invertirse en el servicio para ampliar el acceso y reducir el precio de uso para los hogares más pobres y mejorar las condiciones de trabajo en lugar de pagarse a los accionistas.

Por ejemplo, en 2010, París remunicipalizó su instalación de agua, creando Eau de Paris. Desde entonces, la empresa ha realizado importantes reinversiones en el mantenimiento y la mejora de la red (71,1 millones de euros en 2017) y ha podido reducir las tarifas de los usuarios del agua en un 8%, ahorrando 76 millones de euros entre 2011 y 2015. Barcelona ha avanzado hacia la remunicipalización de la energía mediante la creación de Barcelona Energía (BE), de titularidad pública. En 2019, la empresa pública comenzó a prestar servicio a 20.000 hogares, distribuyendo energía renovable generada localmente. Sus tarifas son controladas por la administración local, que espera obtener un ahorro significativo solo por utilizarla para alimentar todos sus edificios y servicios públicos.²²



8. SUBVENCIONES CRUZADAS

Cuando los servicios públicos, como el agua y la energía, son de gestión pública, se pueden utilizar subvenciones cruzadas para que los servicios sean accesibles y asequibles para todos. Este mecanismo de financiación sólo es posible cuando los SP son públicos, lo que permite a las autoridades trasladar el excedente de un servicio a otro que no genera ingresos o que los genera en escasa medida, de modo que incluso las comunidades pobres, las zonas escasamente pobladas y las rutas de transporte no rentables reciben el mismo servicio. Las subvenciones cruzadas pueden ser, por tanto, una poderosa herramienta para hacer frente a las desigualdades territoriales y para invertir en infraestructuras a largo plazo que proporcionen una cobertura de servicios para todos.²³

En Alemania, por ejemplo, la financiación cruzada de los servicios públicos por parte de los municipios constituye

una forma común de financiación de los servicios públicos que no puede cubrirse únicamente con las cuotas de los usuarios. Por ejemplo, el sistema de transporte de Múnich se financia en parte con los ingresos de su sector eléctrico. Al igual que muchas otras ciudades de Alemania en las últimas décadas, Múnich experimentó una disminución de la financiación nacional del transporte público, lo que provocó un déficit creciente en la Compañía de Transportes de Múnich (MVG). Su empresa matriz, la empresa pública de Múnich (Stadtwerke Muenchen-SWM), equilibró esta deuda con el superávit obtenido en su sector eléctrico. Estos dos SP municipales también están conectados de otra manera innovadora: La empresa pública de energía de Múnich suministra energía renovable a todo el metro, los tranvías y los autobuses eléctricos de la ciudad, de modo que el sistema de transporte público de Múnich funciona totalmente con energía verde.²⁴





9. CONSORCIOS INTERMUNICIPALES Y ASOCIACIONES PÚBLICO-PÚBLICAS

Del mismo modo, cuando los servicios públicos y los SP son de propiedad pública, pueden unirse para generar economías de escala y crear sinergias a través de consorcios intermunicipales y asociaciones público-públicas (APP). Los consorcios intermunicipales implican contratos o producción conjunta con otros gobiernos locales como medio para obtener economías de escala, mejorar la calidad del servicio y promover la coordinación regional de los servicios, dentro de un país o entre países. Son especialmente comunes en los servicios públicos, ya que es más fácil y ventajoso para los municipios con presupuestos reducidos compartir equipos y mutualizar activos y costes. La región de Cerdeña (Italia) creó un sistema intermunicipal de gestión de residuos públicos. No solo estableció un sistema eficaz de clasificación de residuos, sino que también redujo su generación de residuos en un 16% -143.724 toneladas- entre 2006 y 2015.

Las APP conllevan la colaboración entre dos o más autoridades u organizaciones públicas, basada en la solidaridad, para mejorar la capacidad y la eficacia de uno de los socios en la prestación de los servicios públicos. Las APP pueden ser entre países, entre diferentes municipios o abarcar diferentes servicios públicos en un mismo municipio. Las relaciones entre socios se forjan en torno a valores, intereses y objetivos comunes, pero que excluyen la búsqueda de beneficios. La ausencia de consideraciones comerciales permite a los socios públicos reinvertir recursos en la capacidad local, para construir una confianza mutua que se traduce en un aumento de la capacidad

a largo plazo con bajos costes de transacción.²⁵

En la práctica, el trabajo de las APP puede dividirse en cinco grandes categorías:

- formación y desarrollo de los recursos humanos
- apoyo técnico en una amplia gama de temas
- mejorar la eficiencia y crear capacidad institucional
- servicios de financiación
- mejorar la participación de la ciudadanía.

Por ejemplo, la asociación entre Finlandia y Vietnam se desarrolló a través de la agencia de desarrollo bilateral finlandesa (FINNIDA) y dio lugar a un sistema de suministro de agua más eficiente y a la formación de la mano de obra en Vietnam. Entre 1990 y 1995, el 50% de la inversión de la empresa vietnamita de aguas, Hai Phong Water Supply Company (HPWSC), procedió de esta APP.

Las APP también pueden ser un medio para proteger a una empresa pública amenazada por la privatización. En Cali (Colombia), en 2016, el gobierno municipal exigió a Emcali, un proveedor municipal de servicios públicos de agua, electricidad y telecomunicaciones, que privatizara su unidad de telecomunicaciones, ya que supuestamente no obtenía suficientes beneficios. El sindicato de la empresa de agua, Sintraemcali, se resistió a la privatización y consiguió proponer la creación de una APP en su lugar. Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, que proporciona la red nacional de banda ancha más inclusiva del mundo y la más rápida de América, creó una APP con Emcali.²⁶

10. JUSTICIA FISCAL Y COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Las ciudades²⁷ y las zonas urbanas, que concentran el 80% del PIB mundial y el 28% de la mano de obra del mundo, son los motores del crecimiento y el desarrollo mundiales, pero para liberar plenamente su potencial de inclusión económica y social necesitan recursos suficientes para financiar e invertir en sus SP urbanos y locales. El gobierno central tiene la responsabilidad de garantizar que esto ocurra, y de asegurar que la riqueza corporativa y privada -especialmente las empresas multinacionales (EMN)- no se aproveche de las comunidades locales y pague su parte justa de impuestos, ya que los GLR no pueden lidiar con una base fiscal móvil.

Los impuestos son la principal fuente de financiación de los servicios públicos. La financiación pública a largo plazo de unos servicios públicos locales de calidad pasa necesariamente por el pago de una cuota justa de impuestos por parte del sector privado que opera o se abastece dentro de la jurisdicción de los GLR competentes. La elusión sistemática del impuesto de sociedades y del patrimonio privado, la competencia fiscal intermunicipal y regional, los excesivos incentivos fiscales y los paraísos fiscales -algunos de los cuales tienen su origen en las ciudades- privan a los gobiernos centrales y locales de los recursos que necesitan para prestar servicios esenciales a lxs habitantes de sus ciudades.

Por ejemplo, las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos trasladan cada año entre 500.000 y 700.000

millones de dólares de beneficios a los paraísos fiscales o a los países que favorecen la reducción del impuesto de sociedades para evitar sistemáticamente el pago de las cuotas tributarias a los países y comunidades locales en los que operan, de los que se abastecen de materias primas y mano de obra y de cuyos SP se benefician. Esta cantidad de impuestos perdidos corresponde a unos 200.000 trabajadores municipales empleadxs en servicios de utilidad pública, a 80.000 enfermerxs de hospitales públicos o a 80.000 trabajadorxs sociales.²⁸ Durante su mandato, la administración Trump redujo drásticamente el impuesto de sociedades de Estados Unidos del 35 al 21 por ciento, creando un enorme agujero en las finanzas públicas estadounidenses.²⁹

Del mismo modo, solo en Ghana, las exenciones fiscales proporcionadas por el gobierno solo en 2017 fueron de 2.600 millones de GH (475 millones de USD). Esta cantidad es suficiente para emplear a 10.000 enfermerxs o profesorxs durante más de diez años. A un precio unitario de 10,00 USD por dosis, esta cantidad podría comprar a Ghana más de 47 millones de dosis de la vacuna Covid-19.³⁰ Esto sería más que suficiente para cubrir la población de Ghana (31 millones). Sólo en Nigeria, entre 1992 y 2015, se perdieron 12.000 millones de dólares en incentivos fiscales en las Zonas Francas de Exportación de Nigeria. Con esta cantidad se podrían comprar más de mil millones de dosis de vacunas. La población de Nigeria es actualmente de unos 211 millones de habitantes.³¹



Las empresas multinacionales y los ricos deben pagar impuestos a las comunidades donde operan y cuyos recursos utilizan para generar beneficios. Los GLR deben participar en la formulación de la política fiscal y comercial, de modo que puedan garantizar acuerdos equilibrados con las empresas e inversores nacionales y mundiales y tengan derecho a opinar directamente sobre el establecimiento de rendimientos justos para las comunidades locales en términos de ingresos fiscales, creación de trabajo decente a nivel local, transferencia de tecnologías limpias, reinversión de beneficios, fijación de precios justos para los productos básicos, adquisición de productos y servicios digitales públicos y derecho a sus propios datos, cláusulas de resolución de conflictos no abusivas y protección de los SP para sus comunidades.³² Sin embargo, existen más de 3.000 tratados bilaterales que tienen por objeto repartir el derecho a gravar los ingresos de una multinacional entre el país en el que reside y el país en el que hace negocios. A menudo, estos tratados fiscales están desequilibrados y pueden llevar a los países en desarrollo a renunciar a valiosos derechos fiscales en la creencia de que esto los hará más atractivos para los inversores.³³

A veces, el marco del mecanismo de disputa de estos tratados bilaterales ata las manos de los gobiernos locales y les impide perseguir objetivos de política social y medioambiental y mejorar los servicios públicos. También les impide aumentar los salarios de su personal. Los tratados fiscales y comerciales bilaterales suelen utilizar el Sistema de Arbitraje de

diferencias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) para cerrar el espacio de las políticas públicas y cargar al erario público con el alto coste de los procesos de resolución de conflictos y sanciones. Según el sistema ISDS, las empresas multinacionales (EMN) tienen derecho a demandar a los gobiernos si las iniciativas políticas, como los aumentos salariales, la protección de la salud pública, la protección del medio ambiente, la remunicipalización o las reformas fiscales, ponen en peligro sus beneficios o afectan a sus activos. Con este esquema, las EMN tienen derecho a demandar a los Estados en tribunales internacionales, muchos de los cuales tienen su sede en Washington D.C. (EE.UU.), lo que les evita pasar por los sistemas judiciales de los Estados. Los abogados privados actúan como árbitros en estos tribunales. Los estados acaban pagando un precio en forma de multas y tasas judiciales impuestas por las EMN, lo que inevitablemente afecta a la financiación de los GLR. Por ejemplo, entre 1993 y 2010, las pérdidas de África debidas a los casos de ISDS ascendieron a más de 50 millones de dólares.³⁴

Para recuperar los valiosos recursos fiscales con los que financiar los servicios públicos locales, es fundamental la inversión del gobierno central en autoridades fiscales adecuadamente financiadas, dotadas de personal, capacitadas e independientes en condiciones de trabajo decentes y con protección de lxs denunciantes, ya que puede recuperar los recursos perdidos por la evasión y la optimización fiscal. La autoridad fiscal de Tanzania ha creado una



©freepik

unidad de fiscalidad internacional con diez empleadxs que, con un coste de personal de unos 130.000 dólares al año, había recaudado unos 110 millones de dólares desde 2012, en un país en desarrollo donde se necesitan desesperadamente más ingresos para pagar los servicios públicos a lxs ciudadanxs. El sindicato de la función pública del Reino Unido, PCS, calcula que cada inspector/a fiscal dedicadx al cumplimiento de las normas devuelve al gobierno británico unas 650.000 libras (755.000 euros) netas de gastos de personal al año, y una “unidad especial de investigación” que lucha contra los casos más complejos de evasión fiscal ha rendido 450 veces sus costes.³⁵ Asimismo, los GLR deberían exigir a sus gobiernos centrales que no suscriban tratados bilaterales con disposiciones de ISDS. Deberían trabajar, y aprender, de otros países que a lo largo de los años han sido capaces de retirarse de dichos tratados y privilegiar o desarrollar sistemas de resolución de conflictos con empresas privadas que sean equilibrados, utilicen los tribunales nacionales e impliquen debidamente a las instituciones públicas -incluidos los GLR- para resolver las disputas comerciales.

Las plataformas y los operadores de la economía colaborativa, como Uber y Airbnb, tienen un claro impacto en las ciudades y los territorios (por ejemplo, aumentando la densidad del tráfico urbano, fomentando el cambio del transporte público al privado, y aumentando los costes de alquiler para lxs residentes permanentes). Sin embargo, los marcos fiscales y reglamentarios nacionales van a la zaga, lo que significa que los GLR están soportando las consecuencias, pero no pueden recuperar ningún porcentaje de los enormes beneficios obtenidos por estas empresas multinacionales en sus jurisdicciones. En su Declaración Conjunta en el contexto de la pandemia de Covid-19, la ISP y CGLU hacen un llamamiento a los gobiernos nacionales y a las instituciones financieras multilaterales e internacionales/regionales para que “introduzcan un impuesto sobre los servicios digitales y un impuesto sobre los movimientos especulativos financieros que garantice que una parte justa se canalice hacia los territorios más necesitados y se utilice en el fortalecimiento de la resiliencia de los SP”.³⁶





11. EL POTENTIAL DE LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO

Los bancos públicos de desarrollo (BPD) son propiedad o están controlados por el Estado y su objetivo es cumplir los objetivos de las políticas públicas para apoyar el desarrollo económico de un país o región. Aunque los bancos públicos de desarrollo se preocupan por los rendimientos financieros, el beneficio no es su principal motor y no necesitan funcionar según los imperativos del mercado y de la maximización del beneficio.³⁷

Durante el Covid19, a medida que los inversores privados se retiraban de la economía afectada por la pandemia (no tienen interés en rescatar a las empresas de la economía real, mejorar el acceso y la calidad de los servicios, apoyar los servicios sociales, proporcionar viviendas públicas a las personas sin hogar o crear puestos de trabajo para lxs desempleadxs afectados por la crisis), los bancos públicos han intervenido para garantizar la liquidez, financiar a las agencias de salud pública con escasez de efectivo, evitar las quiebras de GLR y rescatar a las empresas (incluidas las PYME de la economía real) para evitar el colapso socioeconómico.³⁸ Deliberadamente eclipsados por décadas de neoliberalismo pro privado a favor de los bancos comerciales, y relegados al papel de prestamista de última instancia para rescatar empresas privadas de riesgo (por ejemplo, la crisis financiera de 2008), los bancos públicos han desempeñado

tradicionalmente un papel crucial en el desarrollo, la inversión en infraestructuras de servicios públicos, la industrialización y la innovación tecnológica de prácticamente cualquier país.

Muchos bancos públicos son subnacionales, como bancos estatales, provinciales o municipales. Mediante la inversión de fondos públicos en proyectos de interés público y la emisión de préstamos para objetivos sociales y medioambientales que no producen rendimientos financieros a los que acudirían los inversores privados, los bancos públicos son un instrumento clave para hacer frente a las múltiples crisis de nuestro tiempo. Además, los tipos de interés de los bancos públicos son siempre más ventajosos que los de los privados, ya que los gobiernos pueden imprimir dinero y prestarse a sí mismos, magnificando en última instancia los recursos públicos y siendo la entidad más solvente del entorno. Mientras que los gobiernos locales buscan soluciones a medio y largo plazo para una financiación fiable, adecuada y estable de los servicios públicos locales de calidad, los bancos públicos tienen un papel clave que desempeñar. Según la UNCTAD, “los bancos públicos pueden recibir un mejor apoyo en el futuro y pueden ayudar a garantizar que esta pandemia no conduzca a otra ‘década perdida’”.³⁹



© Banner vector created by rawpixel.com - © Abstract photo created by lifeforstock - www.freepik.com

12. CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL ESTRATÉGICA

En 2018, la contratación pública ascendió a 11 billones de dólares del PIB mundial de casi 90 billones de dólares, lo que supone el 12% del PIB mundial. Los gobiernos locales y regionales (GLR) son los principales agentes de la contratación pública, representando en promedio casi el 50% de la contratación pública en la OCDE. Esta cifra se eleva al 62% en los países federales.⁴⁰ Aunque las cadenas de contratación de los GLR pueden extenderse por todo el mundo y atravesar los continentes, pueden utilizarse estratégicamente para alimentar las economías fragmentadas y beneficiar a las comunidades locales. E incluso en tiempos de crisis, las principales instituciones locales, como escuelas y hospitales, necesitan adquirir bienes y servicios vitales vinculados a la prestación de servicios públicos locales.

En 2010, en el Reino Unido, el ayuntamiento de Preston se vio muy afectado por los recortes de austeridad

y la desinversión. Para contrarrestar las desastrosas consecuencias socioeconómicas para su comunidad, inspirándose en el ejemplo de Cleveland (Ohio), el ayuntamiento de Preston modificó en 2011 sus procesos de contratación para las instituciones públicas de gran envergadura con un papel importante en la ciudad -como colegios y hospitales-, animándolas a contratar servicios de proveedores locales socialmente responsables siempre que fuera posible, en contraposición a los grandes actores corporativos. Esta labor aumentó el gasto en contratación pública en Preston en 74 millones de libras desde 2012-13.⁴¹ En 2016/17, el gasto local había aumentado significativamente: de los 620 millones de libras gastados en bienes y servicios por las mismas instituciones ancla, el 19% se gastó en Preston y el 81% en el conjunto de Lancashire. Esta práctica benefició en gran medida a la economía y el empleo locales. La iniciativa de Preston se basa en la Ley de Servicios Públicos (Valor Social) del Reino Unido de 2013,





que permite a los organismos públicos británicos tener en cuenta el impacto social, medioambiental y económico de sus encargos en sus procesos de licitación. El caso de Preston demuestra que las autoridades locales, a través de prácticas progresistas de contratación pública, pueden fomentar la inclusión social en sus comunidades locales incluso en tiempos de austeridad y recortes presupuestarios.⁴²

A raíz del brote de la enfermedad de las vacas locas de los años 90, el municipio francés de Mouans-Sartoux dejó de adquirir productos de una empresa de catering de alimentos y optó por un programa de transformación de 10 años para servir alimentos totalmente ecológicos producidos localmente en sus escuelas e instituciones públicas locales. En la actualidad, este plan de aprovisionamiento local ofrece 400.000 comidas ecológicas al día suministradas a través de una granja ecológica de 6 hectáreas propiedad del municipio (en un terreno previamente abandonado). Los alimentos son cultivados por tres agricultores contratados directamente por el municipio. Los residuos han disminuido en un 75% en el proceso de producción de las comidas escolares, mientras que una encuesta mostró que el 66% de los hábitos alimenticios de toda la población han cambiado posteriormente para mejor, hacia alimentos más sanos, locales y orgánicos. Sin embargo, los ayuntamientos están en desventaja a la hora de adquirir alimentos para los comedores públicos. Las normas de la UE obligan a convocar un concurso público a nivel comunitario en lugar de optar por comprar directamente a los productores locales, mientras que las empresas que ganan un concurso son libres de comprar a cualquier proveedor de su elección.

Habida cuenta de que el Covid19 ha demostrado la urgente necesidad de reubicar cadenas de suministro vitales, como las de equipos de salud, vacunas y medicamentos, entre otros, es justo preguntarse si es realmente necesario adquirir tantos bienes básicos a nivel internacional buscando el precio más bajo posible. La respuesta es que muchos de ellos pueden adquirirse al alcance de la mano, si no en la propia empresa. Además, un uso estratégico de la contratación GLR puede incluir cláusulas laborales y medioambientales en las licitaciones y contratos públicos para promover prácticas de abastecimiento socialmente responsables y sostenibles a lo largo de las cadenas de suministro tanto largas como cortas. La reciente Evaluación de Infraestructuras del gobierno canadiense, por ejemplo, propone incorporar los costes laborales y medioambientales reales de los materiales y procesos en las mejores prácticas de contratación, una medida que favorecería la contratación local. A través de estas cláusulas en los contratos de compra, las autoridades locales pueden exigir a los proveedores que adopten normas de mitigación de la crisis climática, que paguen un salario digno, que reconozcan a los sindicatos de la forma más rápida, que negocien y respeten los convenios colectivos, o que contraten cuotas de trabajadorxs vulnerables en todas sus operaciones, como trabajadorxs discapacitadxs o paradxs de larga duración, beneficiando a las comunidades locales con el dinero público que se iba a gastar en cualquier caso.



© Shutterstock

13. FONDO PÚBLICO DE PENSIONES

Las instituciones privadas, como los fondos de pensiones, los fondos de inversión de capital, las empresas de seguros y las compañías financieras, prestan dinero a los GLR a través de las autoridades financieras municipales o mediante la compra de bonos municipales a tipos de interés relativamente bajos. Esta inversión puede proporcionar un flujo de financiación sostenible a los proveedores de servicios públicos de los GLR. A finales de 2020, los activos combinados de los fondos de pensiones mundiales ascendían a más de 35 billones de dólares, superando los niveles de 2019 a pesar de la pandemia del Covid19. En los países de la OCDE, los activos de los fondos de pensiones crecieron casi un 9% para alcanzar los 34,2 billones de dólares a finales de 2020.⁴³

Sin embargo, al igual que las asociaciones público-privadas sacan provecho de la inelástica demanda de servicios, los

consejos de inversión de los fondos de pensiones han reconocido que hay beneficios en las infraestructuras de GLR. Los fondos de pensiones de Canadá y Australia lideran el ámbito de las pensiones en el apoyo a la privatización de los servicios locales, incluso en el Sur global. El gobierno canadiense, en un intento de traer esta bonanza de inversiones de vuelta a casa, ha intentado hacer de la inversión nacional en los fondos de pensiones canadienses y extranjeros una piedra angular de su estrategia de financiación de infraestructuras. Esto es muy problemático, ya que el rendimiento de la inversión que buscan estos fondos es a menudo mucho más alto que los tipos de interés que ofrece el sector público, duplicando y a veces triplicando el coste de un proyecto en veinte o treinta años. Lxs trabajadores, lxs residentes locales y lxs usuarixs de estos servicios pagan la diferencia.





Por ejemplo, en abril de 2021, el Consejo de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) trató de adquirir una participación del 45% en la empresa brasileña de saneamiento Igua Saneamento SA por 1.180 millones de reales (213 millones de dólares canadienses) para reforzar la oferta de Igua en la privatización de la empresa de saneamiento de Río de Janeiro CEDAE.⁴⁴ La afiliada brasileña de la ISP, la Federación Nacional de Trabajadores Urbanos, FNU, está comprometida en una lucha para mantener el agua pública en todo Brasil, con el apoyo de la ISP. El centro de esta lucha es el estado de Río de Janeiro.⁴⁵ Sindicatos canadienses como el Sindicato Canadiense de Empleados

Públicos (CUPE) y el Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE) pidieron al CPPIB que rechazara el plan de invertir en la privatización del sistema de agua y saneamiento de Río de Janeiro.⁴⁶

Los fondos de pensiones y otras instituciones de inversión privadas pueden y deben invertir en los GLR, en las infraestructuras que construyen y en los servicios que prestan, pero no a expensas del control y la propiedad locales. Los organismos controlados públicamente, como las autoridades financieras municipales y los bancos públicos, permiten esta inversión manteniendo un cortafuegos entre el bien público y el beneficio privado.

14. CONCLUSIONES

La financiación sostenible y adecuada de los servicios públicos locales va de la mano de la calidad, el acceso y la igualdad, por lo que es fundamental garantizar una financiación suficiente y segura. Una financiación adecuada y segura de los servicios públicos locales marca la diferencia para las personas en términos de calidad y acceso equitativo a los servicios públicos locales en función de las necesidades, no de la capacidad de pago, así como para las condiciones de trabajo de lxs empleadxs de los servicios públicos locales.⁴⁷

Dado que las autoridades locales y su personal de los servicios de seguridad local se encuentran en la primera

línea de los desafíos simultáneos de nuestro tiempo, es esencial garantizar su capacitación política, fiscal y administrativa, para que puedan crear un desarrollo urbano inclusivo y sostenible y sistemas eficaces de gestión de riesgos y crisis en todos los territorios. Los gobiernos locales y sus SP no son entidades abstractas: están formados por personas trabajadoras, y sólo el personal de los GLR capacitado y bien formado, con condiciones de trabajo y de vida decentes y con acceso a los recursos adecuados, puede ofrecer de forma sostenible unos SP de calidad a las comunidades a las que sirven y afrontar con éxito los numerosos retos que se avecinan.⁴⁸

Notas

1. CGLU, GTF “ [5th Report “Towards the Localization of the SDGs. Sustainable and Resilient Recovery: Driven by cities and territories](#)”, Julio 2021.
2. ISP, “ [PSI puts tax justice for local and urban communities into the public debate at Habitat III PrepCom3](#)”, 6 de agosto de 2016.
3. ISP, “ [Diez puntos clave para ciudades justas y para una Nueva Agenda Urbana inclusiva](#)”, 2016
4. Coote, A. y Yazici, E., “ [Universal Quality Public Services. A Policy Briefing for Trade Unions](#)”, ISP, febrero de 2020, p. 6.
5. Cruz, J. “ [Fiscal Contracts and Local Public Services: Bridging Tax Justice and Inclusive Cities for the New Urban Agenda](#)”, síntesis del informe de investigación ISP GLR, marzo de 2017.
6. Cibrario, D. Wegmann, V., “Access to quality local public services for all: a precondition to beat inequality”, Contribución a GOLD VI, 2021, sin publicar.
7. La “Iniciativa de Gobernanza de Emergencia para Ciudades y Regiones” de CGLU-Metrópolis-LSE Cities encuestó a 33 funcionarixs de finanzas municipales en 22 países de todos los continentes entre noviembre y diciembre de 2020 para explorar el impacto de la pandemia de Covid en los presupuestos subnacionales. CGLU, Metropolis, LSECities, “ [Financing Emergencies in Cities and Regions: ongoing Lessons from the Pandemic](#)”, enero de 2021, p. 5
8. Cibrario, D., “ [Visión general de las megatendencias que afectan a los GLR](#)”, LRGNext2021 Síntesis #2, ISP, agosto de 2021.
9. Declaración conjunta de CGLU - ISP en el contexto de la pandemia de Covid-19 “ [Strong local public services for a safe world](#)”, mayo de 2020.
10. Red de trabajadores GLR de la ISP, informe de la reunión del grupo directivo, sin publicar, 1 de junio de 2021.
11. CGLU, Metropolis, LSECities, “ [Financing Emergencies in Cities and Regions: ongoing Lessons from the Pandemic](#)”, enero de 2021
12. NLC, “ [Cities are Essential](#)”, junio de 2020
13. AFSCME, “ [To pay for infrastructure, require the rich and corporations to pay their fair share of taxes](#)”, 20 de agosto de 2021
14. <https://www.afscme.org/blog/afscme-lauds-president-bidens-bold-comprehensive-infrastructure-plan>
15. UNISON, campaña “ [Save our Services](#)”, agosto de 2021.
16. UNISON, [Save our Services Campaign](#), mapa interactivo de los recortes en los ayuntamientos del Reino Unido, agosto de 2021
17. CGLU, Metropolis, LSECities, “ [Financing Emergencies in Cities and Regions: ongoing Lessons from the Pandemic](#)”, enero de 2021, p. 6
18. Ejercer el poder al nivel más bajo posible para lograr objetivos definidos.
19. Coote, A. y Yazici, E., “ [Servicios públicos](#)”





- [de calidad de acceso universal: Informe sobre políticas destinado a sindicatos](#)”, ISP, febrero 2020, p. 12.
20. CGLU, Metropolis, LSECities, “[Financing Emergencies in Cities and Regions: ongoing Lessons from the Pandemic](#)”, enero de 2021
 21. Wegmann, V. “[Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas](#)”, PSIRU-ISP, Greenwich, Reino Unido y Ferney-Voltaire, Francia, septiembre de 2020,
 22. Cibrario, D., Ciambra, A., “[Afrontando los retos del crecimiento urbano global: iniciativas emblemáticas de Gobiernos locales para alcanzar los ODS](#)”, SDG11, Spotlight on Sustainable Development Report 2019.
 23. Cibrario, D. Wegmann, D., “Access to quality local public services for all: a precondition to beat inequality”, Contribución a GOLD VI, 2021, de próxima publicación.
 24. Vera, Wegmann. [Public Financing. Peoples Public Transport Policy](#), Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Londres, 2019. Pp.24-25
 25. Lethbridge, J. “[Overview of Global Megatrends affecting LRGs](#)”, ISP-PSIRU, 2016, p. 13-14
 26. Wegmann, V. “[Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas](#)”, PSIRU-ISP, Greenwich, Reino Unido y Ferney-Voltaire, Francia, septiembre de 2020, pp. 48-49
 27. ONU Hábitat, [Reporte Mundial de las Ciudades 2020. El valor de la urbanización sostenible](#), (nota de prensa en español) Nairobi, 2020
 28. ISP, “[PSI puts tax justice for local and urban communities into the public debate at Habitat III PrepCom3](#)”, 6 de agosto de 2016.
 29. ISP, “[Fixing Corporate Tax. Why corporate Tax needs Deep Reform](#)”, octubre de 2021
 30. ISP-FES, “[Tackling tax incentives. Ghana](#)”, 30 de enero de 2020
 31. ISP-FES, “[Tackling tax incentives. Nigeria](#)”, 30 de enero de 2020
 32. ISP, “[Diez puntos clave para ciudades justas y para una Nueva Agenda Urbana inclusiva](#)”, 2016
 33. ISP, “[Fixing Corporate Tax. Why corporate Tax needs Deep Reform](#)”, octubre de 2021
 34. Müller, B., Olivet, C., “Impacts of investment arbitration against African states”, TNI, 8 de octubre de 2019 <https://www.tni.org/en/isdsafrica>
 35. ISP, “[Fixing Corporate Tax. Why corporate Tax needs Deep Reform](#)”, octubre de 2021
 36. Declaración conjunta de CGLU - ISP en el contexto de la pandemia de Covid-19 “[Strong local public services for a safe world](#)”, mayo de 2020.

37. Romero M. J., "Reclaiming Public Development Banks to finance a sustainable and equitable recovery post Covid-19", en McDonald, D., Marois, T., Barrowclough, D., "[Public Banks and Covid-19. Combatting the pandemic with public finance](#)" Municipal Services Project (Kingston), UNCTAD (Ginebra) y Eurodad (Bruselas), 2020
38. McDonald, D., Marois, T., Barrowclough, D., "[Public Banks and Covid-19. Combatting the pandemic with public finance](#)" Municipal Services Project (Kingston), UNCTAD (Ginebra) y Eurodad (Bruselas), 2020
39. Id
40. Cibrario, D., "[Impulsando el potencial de la contratación pública local para promover cadenas de suministro socialmente responsables](#)", ISP Marzo 2021
41. Kishimoto, S., Steinfort, L., Ed. "[7 Steps to Build a Democratic Economy](#)", The Future is Public Conference Report, febrero de 2020.
42. Wegmann, V. "[Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas](#)", PSIRU-PSI, Greenwich, Reino Unido y Ferney-Voltaire, Francia, septiembre de 2020.
43. OCDE, Global Pension Statistics <https://www.oecd.org/finance/private-pensions/globalpensionstatistics.htm>
44. Bautzer, T, "Deal with Canada's CPPIB helps Brazil's Igua in Cedae privatization" <https://www.reuters.com/article/igua-saneamento-issue-idUSL1N2LKOX>
45. ISP "[Los dólares del Plan de Pensiones de Canadá están siendo utilizados para financiar la privatización del agua de Bolsonaro en Brasil](#)", 13 de abril de 2021 (en portugués)
46. Businesswire, "Canada Pension Plan Must Scrap Water Privatization Deal" 27 abril 2021, <https://www.businesswire.com/news/home/20210427005923/en/Canada-Pension-Plan-Must-Scrap-Water-Privatization-Deal>; NUPGE "[NUPGE calls on CPPIB to reject investment in water privatization](#)", 21 de abril de 2021
47. Coote, A. y Yazici, E., "[Servicios públicos de calidad de acceso universal: Informe sobre políticas destinado a sindicatos](#)", ISP, febrero de 2020, p. 15-16
48. ISP, "[Diez puntos clave para ciudades justas y para una Nueva Agenda Urbana inclusiva](#)", 2016.





**INTERNACIONAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX
FRANCIA

TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países.

Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad.